Análisis de la legislación de E.I.A. en materia de Repoblaciones Forestales.

La legislación sobre Impacto Ambiental en materia forestal adolece de cierta ambigüedad en cuanto a su aplicación práctica. Hagamos un estudio de la legislación que le es aplicable, intentando concretar los aspectos que desde el punto de vista forestal pueden ser más interesantes.

La directiva comunitaria 85/337/CEE estableció una regulación específica para la Evaluación de Impacto Ambiental en un intento de armonizar los principios para valorar las incidencias sobre el medio ambiente de ciertos proyectos.

Esta norma comunitaria abarca una serie de proyectos, distribuidos en dos anexos. El primero de éstos, incluye aquellos que los Estados miembros han de recoger preceptivamente en su legislación como proyectos que se han de someter a Evaluación de Impacto Ambiental. Por su parte, el segundo anexo, se refiere a proyectos, que los Estados miembros pueden, voluntariamente, seleccionar o no, en las normas que desarrollen la citada Directiva.

Es dentro de este anexo II donde se encuentran los proyectos de carácter forestal. Así, se incluyen entre otros "las primeras repoblaciones, cuando entrañen riesgos de transformaciones ecológicas negativas y deforestaciones destinadas a permitir la conversión de suelo, para otro tipo de explotación".

La normativa comunitaria se aplica en nuestro país, a través del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y del Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento que desarrolla el anterior.

Esta Legislación Estatal recoge, además de los proyectos incluidos en el anexo I de la directiva, (recordemos que éstos eran de adopción obligatoria), algunos tipos de proyectos del anexo II, entre los que se encuentran las "primeras repoblaciones cuando entrañen riesgo de graves transformaciones ecológicas negativas", considerándose pues, necesario someter a Evaluación de Impacto las primeras repoblaciones, pero no las deforestaciones para la conversión de suelo a otros usos, criterio muy discutible desde el punto de vista técnico-ambiental, pues se podría afirmar, que si bien, no todas las primeras repoblaciones entrañan riesgos de transformaciones ecológicas negativas, toda

deforestación sí lleva unido el citado riesgo.

Posteriormente, a través de la Ley 4/1989 de 27 de Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre se corrige en parte esta situación, como después veremos.

El reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otras cuestiones, detalla el contenido de un Estudio de Impacto Ambiental y desarrolla el procedimiento y los trámites necesarios para la evaluación. También explica con detalle, todas las obras, instalaciones o actividades afectadas por el Real Decreto Legislativo.

En el punto 11, del anexo II, se encuentran de nuevo: "las primeras repoblaciones cuando entrañen riesgo de graves transformaciones ecológicas negativas".

El reglamento, define el término "primeras repoblaciones", según dos criterios:

1. Plantaciones o siembras de especies forestales sobre suelos que los últimos 50 años, no hayan estado sensiblemente cubiertos por árboles de las mismas especies a las que se trata de introducir.

2. Todas las que se vayan a ejecutar sobre terrenos que en los últimos 10 años hayan estado desarbolados.

El primer criterio hace referencia a la especie a utilizar y se dirige hacia la utilización de especies extrañas al lugar en que se ha de efectuar la repoblación.

El segundo criterio para calificar una primera repoblación, se refiere al terreno, abarcándose aquellas repoblaciones que se realicen en zonas desarboladas en el decenio anterior.

Otro concepto que el Reglamento entra a detallar es el que se refiere a "grave transformación ecológica negativa". Así, ésta se producirá cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

1. La destrucción parcial o eliminación de ejemplares de especies protegidas o en vías de extinción.

2. La destrucción o alteración negativa de valores singulares botánicos, faunísticos, edáficos, históricos, geológicos, literarios, arqueológicos y paisajísticos.

3. La actuación que, por localización o ámbito temporal, dificulte o impida la nidificación o la reproducción de especies protegidas.

4. La previsible regresión en la calidad de valores edáficos, cuya recuperación no es previsible a plazo medio.

5. Las acciones de las que pudiera derivarse un proceso erosivo incontrolable, o que produzcan pérdidas de suelo superiores a las admisibles en relación con la capacidad de regeneración del suelo.

6. Las acciones que alteren paisajes naturales y humanizados, de valores tradicionales arraigados.

7. El empleo de especies no incluidas en las escalas sucesionales naturales de la vegetación correspondiente a la estación a repoblar.

8. La actuación que implique una notable disminución de la diversidad biológica.

De este modo, los proyectos de repoblación forestal, que según la legislación nacional es preciso someter a Evaluación de Impacto Ambiental, son aquellos que diseñen primeras repoblaciones y que al mismo tiempo, entrañen riesgo de causar graves transformaciones ecológicas negativas. Así, un proyecto que escape a algunas de estas dos circunstancias quedará exento de Evaluación de Impacto. Por tanto, dentro de la ambigüedad que encontramos en estas definiciones legales, podemos considerar que las repoblaciones que se han de someter a Evaluación de Impacto Ambiental son: las primeras repoblaciones con especies distintas de las que se encuentran en la zona, (especialmente en el caso de Eucaliptos y *Pinus radiata*), las realizadas con técnicas agresivas de preparación del suelo, (desbroces por quema a matarrasa, terrazas, fuertes acaballamientos), y aquellas otras que por ser monoespecíficas, tener gran extensión o afectar a valores particulares del medio, puedan tener una repercusión negativa sobre él.

Hay que tener en cuenta, que salvo las repoblaciones con especies de crecimiento rápido, el resto suelen ser afrontadas por la Administración, (en

Andalucía IARA y AMA). Es, por lo tanto, a estos organismos a quienes correspondería realizar el estudio de Impacto Ambiental, en caso de que fuera necesario, y someterlo a posterior evaluación a través de la AMA.

El reglamento no incide en el tema de la deforestación, que no se recoge en el real Decreto Legislativo 1302/1986 y sí en la Directiva comunitaria.

No obstante, finalmente se ha reconocido la importancia de los efectos ambientales que cualquier deforestación puede producir, máxime en nuestro país, en que amplias zonas de vocación forestal, han sido roturadas, convirtiéndose en cultivos agrícolas marginales, que han acelerado en gran medida los procesos erosivos y perjudicando considerablemente a la flora y fauna.

Esto ha sido a través de la ley 4/1989 de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales, y de la Flora y la Fauna Silvestres que en su Disposición Adicional 2ª dice:

"Se amplía la lista de actividades sometidas a evaluación de Impacto Ambiental contenida en el anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio, con la inclusión en la misma de las transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Nación, y en todo caso cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas".

Por tanto, si bien se somete a Evaluación de Impacto Ambiental la eliminación de una cubierta vegetal arbustiva o arbórea, esto se hace con dos supuestos:

1. Que supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la Nación.

2. En todo caso, cuando afecte a superficies superiores a 100 hectáreas.